

Poder Judicial de la Nación

Córdoba, 15 de mayo de 2024.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “**Incidente N° 12 IMPUTADO: S** ,
M S/ INCIDENTE DE FALTA DE ACCIÓN” (Expte. N° FCB
39955/2019/TO1/12), pasan a despacho para resolver el planteo deducido por
el abogado defensor Dr. F C O ;

Y CONSIDERANDO:

I.- Con fecha 17.04.2024 el Dr. F C O en
representación de la imputada M S presentó el escrito titulado:
“*INTERPONE EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN –MODIFICACIÓN DEL
UMBRAL DE PUNIBILIDAD DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS LEY
27.739 – PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL–*”.

En concreto, el letrado interpuso excepción de falta de acción, respecto
al *hecho nominado tercero, puntos 1, 3, 4, 5 y último párrafo* del requerimiento
de elevación de la causa a juicio de fecha 27.07.2023, donde M S
se encuentra imputada, en función de que dicha acción se encontraría
prescripta. En virtud de ello, y de los argumentos que expuso –a los cuales nos
remitimos en honor de la brevedad– peticionó el dictado del sobreseimiento de
su asistida por extinción de la acción penal.

Expuso que el valor total de los bienes sobre los cuales habrían recaído
las supuestas maniobras de lavado y la participación de S – a la fecha
en que tales operaciones habrían sido realizadas– asciende a un total de pesos
seis millones ochenta y siete mil (\$6.087.000).

Seguidamente, refirió que la Ley 27.739 publicada en el Boletín Oficial
el 15 de marzo pasado, sustituyó el art. 303 del Código Penal que quedó
redactado de la siguiente manera: “1. *Será reprimido con prisión de tres (3) a
diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación,
el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere,
disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado,
bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia
posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran*

la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38853975#411975410#20240515115535156

USO OFICIAL

ciento cincuenta (150) Salarios mínimos, vitales y móviles al momento de los hechos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. 2. (...) 3. (...) 4. Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1), el autor será reprimido con la pena de multa de cinco (5) a veinte (20) veces del monto de la operación. 5. (...)".

Seguidamente, indicó que la Resolución 4/2024 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (BON 21/02/2024), en el art. 1 inc. "b" instauró desde el 1 de marzo del corriente año, que el salario mínimo vital y móvil asciende a la suma de pesos doscientos dos mil ochocientos (\$202.800). Por lo tanto, refirió que el importe mínimo previsto en el nuevo tipo penal del art. 303 del Código Penal —para el delito de lavado agravado— asciende a la suma de pesos treinta millones cuatrocientos veinte mil (\$30.420.000), quedando así los delitos de un importe inferior comprendidos en el delito básico estipulado en el inc. 4 del citado cuerpo legal.

A partir de ello, entendió que la conducta atribuida a su asistida, tras la reforma operada por la Ley 27.739, quedó subsumida en el delito estipulado en el inc. 4 del art. 303 del Código Penal, reprimido con pena de multa, por aplicación de la ley penal más benigna. En razón de lo cual, estableció que corresponde a los efectos de la prescripción el dispositivo establecido en el art. 62 inc. 5 del referido cuerpo legal.

Por otra parte, añadió que el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de elevación a juicio el 27.07.2023 mientras que, durante el lapso transcurrido entre el 17.02.2020 —fecha en que Schörnig prestó declaración indagatoria— y el 17.02.22 —dos años después de dicha declaración—, no concurrió ninguna causal de suspensión o interrupción de la prescripción.

Así, concluyó que la acción penal seguida contra su representada se encuentra prescripta de pleno derecho y, en consecuencia, solicitó su sobreseimiento, con relación al hecho tercero, puntos 1, 3, 4, 5 y último párrafo, en virtud de lo dispuesto en el art. 336 inc. 1 del Código Procesal Penal de la Nación.



Poder Judicial de la Nación

Por último, hizo reserva de caso federal y de ocurrir ante la Cámara Nacional de Casación Penal vía recurso de casación.

II.- Recibida la presentación efectuada por el abogado defensor, en razón de la naturaleza de las cuestiones planteadas, se corrió vista al Ministerio Público Fiscal y a la querella representada por la Unidad de Información Financiera.

III.- En primer lugar, se presentó el señor Fiscal General Dr. Carlos María Casas Nóbrega y dictaminó en contra de lo solicitado por la defensa.

Refirió que el nuevo art. 303 del Código Penal expresamente señala que el ilícito bajo análisis se configura: *“siempre que su valor supere la suma de ciento cincuenta (150) Salarios mínimos vitales y móviles al momento de los hechos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”*. Con lo cual, mediante la nueva técnica legislativa utilizada, y a los fines de determinarse si el hecho alcanza la condición objetiva de punibilidad para encuadrarlo en el art. 303, inc. 1, se fijó una unidad de medida que corresponde al SMVM vigente al momento de los hechos, abandonándose así el sistema nominalista.

En su opinión, esto obedeció a la constante depreciación de la moneda nacional y para evitar así el masivo dictado de sobreseimientos por atipicidad o prescripción — como el caso que nos ocupa—.

Destacó que la interpretación de la norma es clara y no deja resquicios de otros sentidos, ya que: *“cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente”*, sin atender a otras consideraciones. Asimismo, indicó que según la Corte la primera fuente de interpretación es la propia letra de la ley, y en principio, debe acudirse al sentido común o corriente de las palabras empleadas por la proposición normativa en cuestión.

Subrayó que el deber del Ministerio Público Fiscal es emplear criterios que conduzcan al mantenimiento de la acción penal, no a su extinción.

Conforme a ello, refirió que no existen dudas que hay que estar al salario mínimo vital y móvil vigente al momento de los hechos. A tal fin, consultó el

USO OFICIAL



teniendo en cuenta las fechas consignadas en los puntos 1, 3, 4, 5, 6 y último párrafo del hecho tercero, arribando por consiguiente, a los siguientes salarios mínimos vitales y móviles: \$11.300; \$10.000; \$ 6.810; \$8.060; \$ 8.860 y \$ 5.558 respectivamente, que vinculados entre sí, le arrojaron un total de setecientos ochenta y siete (787) SMVM. Así, concluyó que las maniobras atribuidas a S superan ampliamente la condición objetiva de punibilidad, correspondiendo —en principio— su encuadre legal en la figura agravada de lavado de activos prevista en los incs. 1) y 2) primer supuesto del nuevo art. 303 del Código Penal.

Por último, consideró que la acción penal se encuentra plenamente vigente, en virtud de que el último acto interruptor de la prescripción fue el decreto de citación a juicio de fecha 27.11.2023, correspondiendo en su consecuencia el rechazo del planteo efectuado por el Dr. C O .

IV.- En segundo lugar, y en oportunidad de contestar la vista, se presentó el Dr. Mariano Abel Ezeyza apoderado de la Unidad de Información Financiera y Director de la Dirección de Litigios Penales.

Consideró que el planteo efectuado debe rechazarse por improcedente y por no resultar aplicables al caso ninguno de los dos institutos expuestos por la defensa.

Refirió que —a criterio de la Unidad que representa— no es de aplicación retroactiva la Ley 27.739. Fundamentó dicha postura en el principio de razonabilidad, ya que el delito de lavado no fue legislado de manera menos gravosa y tampoco se trata de una ley penal más benigna.

Seguidamente expresó que la política criminal actual perseguida por el Estado, tiene en miras fortalecer el sistema de prevención y sanción del lavado, y recuperar los bienes de origen ilícito. Por lo que la pretensión fue mantener los valores objeto del ilícito penal actualizados, mediante una fórmula que no requiera de una modificación permanente, ya que se trató de una actualización del monto y mecanismo de determinación de las condiciones objetivas de punibilidad del lavado, no el tipo penal. Dicho cambio se tradujo en la mejora de la técnica legislativa, reconociéndose así el efecto de la inflación, que impacta

en el piso de punibilidad.

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38853975#411975410#20240515115535156

Poder Judicial de la Nación

Respecto a la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna —en materia de lavado—se remitió a lo sentado por la Corte Suprema en autos: “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769” del 2021 y “Caravetta” del 2023.

Entendió que, si la nueva ley no modifica la conducta típica, corresponde emplear la vigente al momento del hecho. Asimismo, estableció que aplicando la Ley 27.739, se supera ampliamente el piso de punibilidad fijado en el art. 303 del Código Penal, ya que el valor de los bienes objeto de lavado deben superar la suma de 150 SMVM al momento de los hechos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

En relación a las maniobras de lavado imputadas, argumentó que configuran un delito continuado, constituido por una pluralidad de hechos típicos detallados en la requisitoria y que puede establecerse como fecha de culminación —en el punto tres del hecho tercero—, el 27.02.2019, por ser cuando finaliza el *iter criminis*.

Sostuvo que la defensa —erróneamente— actualizó el monto de lavado según el salario mínimo vital y móvil actual, concluyendo que el valor de los bienes no lo superan, con lo que las maniobras atribuidas se subsumen en el tipo penal residual previsto en el inc. 4, correspondiendo la prescripción de la acción penal. Sin embargo, aplicándose el 303, el SMVM al momento de los hechos — febrero de 2019— era de \$11.300 y, según el criterio legal: $11.300 * 150 = \$1.695.000$, cuando el monto total de lavado atribuido a la imputada asciende a la suma de \$6.136.000, de lo que resulta que se supera ampliamente la base objetiva de punibilidad.

Respecto a la prescripción de la acción penal refirió que, conforme la calificación jurídica de los hechos (art. 301 inc. 1 y 2 apartado a) la acción penal se encuentra vigente.

En abono a su postura, citó lo resuelto por la Cámara Federal, de esta provincia de Córdoba “Sala B”, el 26.10.2023, que confirmó la resolución del Juzgado Federal N° 1 y dispuso no hacer lugar al planteo de sobreseimiento por prescripción de la acción penal, respecto a G L C L e

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38853975#411975410#20240515115535156

USO OFICIAL

requerimiento de elevación a juicio, siendo idénticas la plataforma fáctica, imputación y calificación legal. Adujo que ello, resulta equiparable a la situación de M S y remarcó que en dicha oportunidad la Cámara expresó: *“a los fines de la prescripción, debe estarse a la calificación jurídica razonable más gravosa”* (...).

Por lo expuesto, consideró que debe rechazarse el planteo de prescripción instado por la defensa, debiendo proseguir la causa hasta la conclusión del juicio.

Finalmente, hizo reserva de caso federal y de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

V.- Puestos a decidir acerca de la cuestión traída a juzgamiento por la defensa, nos adelantamos a señalar que el planteo habrá de ser rechazado por improcedente.

En efecto, conforme surge del auto de elevación a juicio del proceso, M S está imputada como organizadora del delito de asociación ilícita fiscal (arts. 15 inc. C in fine de la Ley 24.769 y 27.430 y 45 del C.P) y lavado de activos de origen ilícito, agravado por la habitualidad y por la utilización de persona ideal, en carácter de partícipe necesaria (arts. 303 incs. 1, 2 apartado a y 45 del C.P).

Pues bien, con fecha 15 de marzo del corriente año, fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.739 que reformó una serie de disposiciones del Código Penal, entre ellas, el art. 303 correspondiente al delito de lavado de activos. Respecto a este delito, fue modificada la condición objetiva de punibilidad, ya que anteriormente el ilícito se configuraba cuando el valor de los bienes que se pusieran en circulación en el mercado superase la suma de pesos trescientos mil (\$300.000), mientras que en su redacción actual la suma de todas las operaciones debe superar el valor de 150 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) **al momento de los hechos**, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Asimismo, fue añadido en el inc. 1 el verbo típico “adquirir”, y en el inc. 4 la pena de 6 meses a 3 años de prisión fue sustituida por la multa de 5 a 20 veces el monto de la operación.



Poder Judicial de la Nación

Sentado lo anterior, conforme lo establecido en el nuevo art. 303 inc. 1 del Código Penal, a los efectos de determinar si el hecho imputado a M S alcanza la condición objetiva de punibilidad, es necesario determinar el valor del SMVM vigente al momento de los hechos, según lo dispuesto por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil y, luego constatar si estos superan la suma de 150.

Así, de las constancias obrantes en la causa, surge que el Fiscal de Instrucción en el requerimiento de elevación a juicio —hecho tercero— detalló un conjunto de bienes y su valor correspondiente, a la fecha que fueron inscriptos a nombre de la imputada M S, a saber:

- 1) Febrero de 2019: Camioneta Dodge Ram - - (\$2.120.000).
- 2) Julio de 2018 Camioneta VW Amarok - - (\$1.065.000).
- 3) Agosto 2016 Honda HRV - - (\$562.000).
- 4) Enero 2017 Camioneta Dodge Ram - - (\$740.000).
- 5) Septiembre 2017 Utilitario Renault Kangoo - - (\$291.000).

6)- Noviembre 2015 Lote 11, Mzna 259, Sup 1145 m2, Certificado catastral, sito en calle Los Flamencos, Villa Allende, Córdoba, monto de escrituración (\$1.600.000).

Ahora bien, todas las operaciones que se reputan como constitutivas del delito de lavado de activos, atribuido a la imputada S, alcanzan en su conjunto la suma de **\$ 6.378.000**.

Se debe tomar en consideración que para el mes de febrero de 2019, fecha de la última operación de presunto lavado, por Resolución 3/2018, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo, fijó el valor del SMVM en la suma de **\$ 11.300**. Si se multiplica ese monto por ciento cincuenta, de acuerdo al texto de la ley 27.739, arroja como resultado que la condición objetiva de punibilidad debe superar -para operaciones efectuadas a esa fecha- la suma de **\$ 1.695.000**, lo que por cierto ocurre con creces en este caso.

Resulta pertinente dejar constancia -porque la defensa lo excluye- que cuando se incluye en los cálculos en el punto 6 el Utilitario Renault Kangoo, se

toma en consideración lo señalado tanto por el Ministerio Público Fiscal como

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38853975#411975410#20240515115535156

USO OFICIAL

por la querella en sus requerimientos de elevación a juicio, que involucraron precisamente la puesta en circulación en el mercado de ese vehículo, como parte de la actividad atribuida a la imputada.

A la luz de lo expuesto queda claro que el planteo de la defensa es incorrecto, porque los cálculos que esbozó para establecer que las maniobras atribuidas a su asistida como constitutivas de lavado de activos no superaban la condición objetiva de punibilidad, partían de la errónea interpretación del artículo 303 del Código Penal en su redacción actual de la ley 27.739, que establece con meridiana claridad que la determinación del monto equivalente a ciento cincuenta SMVM se debe hacer no según el valor actual fijado para el SMVM sino al que corresponde al momento de los hechos.

En definitiva, la modificación legislativa no ha producido ninguna alteración significativa que resulte beneficiosa para la imputada en los términos del art. 2 del Código Penal, razón por la cual el planteo de prescripción de la acción penal y consecuente sobreseimiento debe ser rechazado por improcedente. Es que, vale señalar, M S prestó declaración indagatoria el 17 de febrero de 2020, el requerimiento de elevación a juicio es de fecha 27 de julio de 2023, y el último acto interruptivo de la prescripción se dictó recientemente, cuando se convocó a las partes a que comparezcan a juicio el 27 de noviembre de 2023. En ninguno de esos períodos se superó el máximo de duración de la pena establecida para el delito de lavado de activos que es de diez años de prisión, razón por la cual cabe considerar que la acción penal se encuentra vigente con relación a dicha infracción penal.

En virtud de todo lo expuesto precedentemente y de conformidad al dictamen del Ministerio Público Fiscal y la querella representada por la Unidad de Información Financiera,

SE RESUELVE:

I. DECLARAR IMPROCEDENTE el planteo de extinción de la acción penal por efecto de la prescripción y en consecuencia el pedido de sobreseimiento de M S , respecto del delito de lavado de activos por el que se requiriera la elevación a juicio del proceso, formulado por su

abogado defensor Dr. F C O (arts. 59 inc. 3, 62 inc. 5, 63, 67

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38853975#411975410#20240515115535156

Poder Judicial de la Nación

y 303, a contrario sensu, del Código Penal; arts. 336 inc. 1 y 339 inc. 2, *contrario sensu*, del Código Procesal Penal de la Nación).

II.- CONTINUAR el trámite de la presente causa, según su estado.

Protocolícese y hágase saber. -

JAIME DÍAZ GAVIER
JUEZ DE CÁMARA

JULIÁN FACUCCI
JUEZ DE CÁMARA

JOSÉ FABIÁN ASIS
JUEZ DE CÁMARA

HERNÁN MOYANO CENTENO
SECRETARIO DE CÁMARA

USO OFICIAL

Fecha de firma: 15/05/2024

Firmado por: CENTENO HERNAN MOYANO, SECRETARIO DE JUZGADO

Firmado por: JAIME DIAZ GAVIER, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JOSE FABIAN ASIS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#38853975#411975410#20240515115535156